

Señor  
**JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI** (Reparto)  
E. S. D.

<b>REFERENCIA:</b> DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. <b>ACCIONANTE:</b> Dr. Hugues Othón Olivella Saurith, T.P. No. 192667 del C.S. de la J. C.C. 12`623.237. <b>ACCIONADO:</b> Municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial de Santiago de Cali.
--

**HUGUES OTHÓN OLIVELLA SAURITH, Abogado, T.P. No. 192667 del C.S. de la J., actuando en CAUSA PROPIA**, identificado con cédula de ciudadanía número 12`623.237 de Ciénaga (Magdalena), presento ante su despacho, **DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, contra el **DISTRITO ESPECIAL<sup>1</sup> DE SANTIAGO DE CALI**, quien se encuentra representado legalmente por el Señor alcalde **JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ**, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 6`342.414 de La Cumbre (Valle del Cauca) o por quien haga sus veces, con el fin que, se declare la nulidad de las siguientes:

- 1.- Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16.
- 2.- Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.
- 3.- Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano. **Esta fue notificada el día doce (12) de octubre de 2022.**

Además, de lo anterior, **se declare a favor del accionante, el restablecimiento del derecho y las demás pretensiones expuestas en esta demanda.**

Así las cosas, solicito respetuosamente, sírvase reconocer personería jurídica a este togado.

Para poner en contexto al despacho, me permito relacionar los siguientes.

**HECHOS**

**1.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.**

Sea lo primero, manifestar que, solo existió una conducta disciplinable para los accionados, que vendría ser, el haber proferido el auto de fecha 10 de agosto de 2016 que, decretó la perención, dentro del proceso de humedad Rad. 1944 – 549 de 2014, que se surtía en la Inspección de Policía de la Nueva Floresta.

En fecha 10 de agosto de 2021, fui notificado del Auto **No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021**, que dio **APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL 647 – 16.**

En ningún momento, el a quo o a quem, dentro del proceso disciplinario surtido en el Exp. 647 – 16, no logró demostrar mediante las fuentes del derecho que, la acción disciplinaria deba extenderse más allá de los cinco (5) años.

<sup>1</sup>Ley 1933 de 2018 por medio de la cual se categorizó al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

Téngase en cuenta que, la decisión de primera instancia, fue notificada en estrado, el día 27 de abril de 2022 y la de segunda instancia, se notificó el 18 de agosto de la misma anualidad.

Nótese, no solo transcurrieron más de cinco años, para proferir y notificar el fallo de primera instancia, sino que, la de segunda instancia, fue posterior a seis (6) años de haberse, presuntamente cometido una falta disciplinaria. **Aún con la suspensión de los términos en actuaciones administrativas, por la Pandemia, por parte de los Decretos Municipales expedidos por el alcalde de Cali, estos fueron del 17 de marzo al 18 de agosto de 2020. (Página 24 de la Resolución No. 4112.010.21.0050 de 2022, que, resolvió la segunda instancia del proceso disciplinario 647 – 16.** Quiere decir, se suspendieron por 5 meses más uno o dos días. Partiendo que, la conducta disciplinable, para ellos, se dio el 10 de agosto de 2016, la prescripción de la acción disciplinaria se configuró el 20 de enero de 2022.

En ese orden de ideas, siendo que, el fallo de primera instancia del Proceso Verbal se notificó en estrado el 27 de abril de 2022, habían transcurrido, más de 2 meses y una semana de estar prescrita la acción disciplinaria, vislumbrándose a todas luces, la VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO., ya que, **al configurarse la prescripción de la acción disciplinaria, la administración perdió la competencia para sancionar.** Ni qué decir, del fallo que resolvió el recurso de apelación en segunda instancia, notificado el 18 de agosto de esta anualidad.

Respecto, a la prescripción de la Acción Disciplinaria que, violenta de calle, el debido proceso, se puede observar en el precedente judicial del Tribunal Contencioso del Cauca, **Acción o medio de control:** Restablecimiento del Derecho. **Radicado:** 19001-23-33-003-2013-00679-00; **Demandante:** JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA **Demandado:** PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN **Fecha de la sentencia:** agosto 24 de 2015 **Magistrado Ponente:** Carlos Hernando Jaramillo Delgado. Entre otros, expresa:

“(…) La Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 7.5 y 8.1 consagra lo siguiente:

**Artículo 7.5:** “Toda persona detenida o retenida deber ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y **tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable** o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso...”

“Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y **dentro de un plazo razonable**, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de analizar el principio del plazo razonable, el cual se deduce de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana antes mencionados. Según dicho Tribunal, tal principio tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.<sup>11</sup>

En efecto, en el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana abordó la situación de la excesiva tardanza de las autoridades del Estado Ecuatoriano en la resolución de la situación jurídica del señor Rafael Iván Suárez Rosero, acusado de la comisión del delito de narcotráfico, considerando lo siguiente:

**“70. El principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad**

**impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.** En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo.

**71. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto,** con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Courier. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, párr. 29) y que, particularmente en materia penal, **dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.** Con base en la prueba que consta en el expediente ante la Corte, ésta estima que la fecha de conclusión del proceso contra el señor Suárez Rosero en la jurisdicción ecuatoriana fue el 9 de septiembre de 1996, cuando el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó sentencia condenatoria. Si bien en la audiencia pública el señor Suárez Rosero mencionó la interposición de un recurso contra dicha sentencia, no fue demostrada esa afirmación.

**72.** Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y **c) la conducta de las autoridades judiciales** (cf. Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993, Series A No. 262, párr. 30).

**73.** Con fundamento en las consideraciones precedentes, al realizar un estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor Suárez Rosero, **la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. En opinión de la Corte, este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana.**

(...)"

Ahora bien, a nivel interno la Corte Constitucional en sentencia C-244 de 1996, siendo Magistrado Ponente el Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, destacó que como parte del debido proceso, la obligación de adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas se aplica a toda clase de actuaciones, y que, por consiguiente “[l]a **justicia impartida con prontitud y eficacia no sólo debe operar en los procesos penales -criminales-, sino en los de todo orden, administrativos, contravencionales, disciplinarios, policivos, etc.**”<sup>12</sup>

**Visto todo lo anterior, esta Corporación se inclina por la interpretación que la Corte Constitucional hace sobre el inciso primero del artículo 30 de la Ley 732 de 2002, según la cual para que no opere la prescripción la actuación disciplinaria debe haberse adelantado y concluido con decisión ejecutoriada, antes de los 5 años, pues garantiza en mayor medida el principio pro homine concretado en el derecho a obtener justicia en un plazo razonable, el cual está amparado por el artículo 29 constitucional, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la interpretación que sobre estos últimos hizo la Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, puesto que dicho criterio asegura que el asunto se resuelva en un plazo razonable** y no permite la indefinición del término en el trámite de la segunda instancia, evitando así el retardo prolongado en la definición jurídica de los inculpadados. (negrilla y subraya fuera de texto)

**Como conclusión, la entidad pública que sanciona disciplinariamente tiene el plazo razonable de cinco (5) años “contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto”, para poner fin a la actuación disciplinaria mediante una decisión ejecutoriada, que para los casos en donde se hayan interpuesto recursos, se consolida con la notificación de su resolución. (negrilla fuera de texto)**

Cabe decir que, la Corte Constitucional, ha establecido que, dentro de los cinco (5) años, debe notificarse incluso, la decisión de segunda instancia y quedar ejecutoriada.

Por las anteriores consideraciones, **solicito, SENTENCIA ANTICIPADA, donde se declare, la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA** y, como consecuencia de ésta, se declare igualmente, la nulidad de los actos administrativos que se atacan.

2.- En fecha 10 de agosto de 2016, actuando como Inspector de Policía de La Nueva Floresta, se profirió Auto Interlocutorio No. 4161.2.24.1.01, por medio del cual, se decretó la perención de la querella por humedad, incoada por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR contra su hermano HERNANDO LONDOÑO CUELLAR Y ALEJANDRA MARÍA LONDOÑO, acorde a la Ordenanza 343 de 2012, del Valle del Cauca, en su artículo 277 que expresa:

“(…) ARTÍCULO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE-. PERENCIÓN DE LOS PROCESOS POLICIVOS. - Cuando la parte interesada deja transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de las que corresponden para que el negocio continúe su curso o no asista a la práctica de las pruebas por ella solicitadas se declarará la perención del proceso. El funcionario al decretar la perención ordenará archivar el expediente y cancelar su radicación. Esta providencia no es susceptible de recurso alguno. Decretada la perención del proceso no habrá posibilidad de intentar uno nuevo por la misma causa. (...)”.

3.- Lo anterior, debido que, presentaba dicho proceso, inactividades prolongadas, sin que el querellante, realizara gestión alguna para su continuidad. Además, el último memorial aportado en diciembre de 2015 por el querellante, donde le expresaba a la Inspectora de Policía que fungía en ese momento que, programara la diligencia de inspección ocular para el mes de febrero de 2016, porque iban a estar por fuera de la ciudad. Pero, pasó febrero, marzo, abril, mayo y hasta el 30 de junio de 2016, fecha en que, la funcionaria que lideraba la Inspección de la Nueva Floresta, Comuna 12, fue retirada del servicio por jubilación, sin que, se allegara documento alguno por parte del quejoso, o fueran a la inspección de policía para dar impulso al proceso.

4.- **Haber decretado la perención en un proceso policivo de humedad, acorde a la norma antes vista, no constituye conducta disciplinable**, así lo expresaron dentro del proceso 647 – 16, los inspectores de policía con más antigüedad en la Alcaldía de Cali, pero, la posición dominante de la Dirección de Control Disciplinario, más, el interés personal, que perseguía el abogado contratista SAUL HERNEY MUÑOZ VARGAS, quien lideró el proceso directa e indirectamente, conllevó a sancionar a este funcionario, aún, no teniendo competencia, por estar prescrita la acción disciplinaria.

5.- Además de lo anterior, no se tuvo en cuenta que, los inspectores gozan de Autonomía en sus decisiones. La Corte Constitucional en Sentencia T 179 – 1996, se pronunció así:

**“(…) INSPECTOR DE POLICIA-Autonomía en sus decisiones**

*Las reflexiones, que cobijan en primer lugar a los jueces, resultan plenamente válidas en el campo de los procesos policivos a cargo de autoridades administrativas, pues aunque ellos no tienen un carácter judicial la materia misma de las decisiones que se adoptan en el curso del trámite y a su culminación exige la independencia del fallador al resolver, en cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de las partes y, muy particularmente, en las distintas fases procesales puede vulnerarse el derecho fundamental al debido proceso. También en los procesos policivos debe predicarse la diferencia entre el adecuado respeto a las garantías procesales y la autonomía de la autoridad llamada a resolver, la cual goza, en proporción adecuada a su responsabilidad, de un razonable margen de interpretación del Derecho aplicable y de apreciación sobre los hechos que, con base en él, están sujetos a fallo. (...)” (negrilla fuera de texto).*

6.- Al haberse decretado la perención dentro del proceso policivo de humedad, en la fecha arriba citada, la parte querellante y su compañera permanente, iniciaron queja disciplinaria y acción de tutela, la cual, esta última, fue fallada favorablemente en primera instancia y revocada por el a quem.

7.- El Director de Control Disciplinario expidió el **AUTO No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021, que dio APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL**, después de tener inactivos los expedientes 647 de 2016 y 068 de 2017, por más de tres y cuatro años, este último, se dio, por trámite incidental de desacato, por orden del Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de esta ciudad, en la cual, en fecha 14 de febrero de 2017, profirió **Auto No. 097**, donde resuelve **ABSTENERSE de continuar el trámite por desacato de la Sentencia de Tutela 145 del 07 de diciembre de 2016**, proferida por ese despacho judicial, **por cuanto el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, revocó el fallo de primera instancia**. Aún más, en el segundo párrafo del Caso Concreto, expresó:

“... De acuerdo con el informe allegado (fl 51 a 57), se demostró que la entidad accionada cumplió con todos los requerimientos exigidos en la sentencia proferida por este recinto judicial...” (págs. 147 expediente 647- 16 Tomo 1).

8.- El **AUTO No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021**, que dio **APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL**, expresa entre otros:

“(...) La decisión de abstenerse de continuarse el trámite del desacato, se notificó mediante el oficio No.447 del 14 de febrero de 2017, concluyendo el trámite de la acción de tutela que finalmente no prosperó, **situación que entonces genera como consecuencia el que no pueda considerarse un comportamiento relacionado con el desacato de la orden de un Juez de la República, pero no ocurre lo mismo para la (sic) evaluar disciplinariamente la actuación de los servidores públicos en torno a la competencia fijada como función del cargo de Inspector de Policía, de conocer, tramitar y fallar un procedimiento policivo, específicamente el PROCESO DE HUMEDAD.** (negrilla fuera de texto original)”

Téngase en cuenta que, debieron haber cerrado el expediente 068 – 17, ya que, fue iniciado por trámite incidental de desacato, donde la Juez 10ª Civil de Pequeñas Causas de esta ciudad, ya se había pronunciado que, no encontró méritos para que fuera sancionado por esta causa, al haber cumplido con lo ordenado por el fallo de tutela de primera instancia. Aun así, continuaron conociendo el proceso, acumulándolo con el expediente 647 – 16, donde se investigaba la presunta

conducta disciplinable de este servidor público, respecto al proceso de humedad, tramitado en el expediente 1944 – 549 de la Inspección de Policía de la Nueva Floresta. A todas luces, se vislumbra que, la Oficina de Control Disciplinario violentó el **Principio NON BIS IN IDEM**. “Nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por el mismo hecho.” Pero, por la **POSICIÓN DOMINANTE** que, ejerce la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cali, desatendieron cuantos recursos impetré, ya que, quien proyectó el Auto que abrió el proceso verbal, es el abogado contratista SAUL HERNEY MUÑOZ, quien tenía, un interés personal, mas no, institucional.

9.- La Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16, presenta múltiples yerros procesales que, fueron expuestos en Alegatos de primera y segunda instancia, e igualmente, desatendidos en la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, notificada el 18 de agosto de 2022, que resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16. Ambas resoluciones, fallando desfavorablemente a este servidor público.

Violan el Debido Proceso, en cuánto, **no resuelven el principio “non bis in ídem”, respecto a que, no podían acumular dos procesos con los mismos actores, hechos y pretensiones, siendo que, ya había uno previo en conocimiento de la Dirección de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cali. Por dicha razón, argumentaban fecha de inicio el 10 de agosto de 2016 y fecha final, 26 de enero de 2017. Siendo que, la conducta disciplinable para ellos, fue una sola, en ningún momento pronuncian en ambas resoluciones que se atacan, que hubo conductas continuas o permanentes, la única falta disciplinaria para ellos, es decretar la perención en el proceso policivo de humedad.** No existe jurídicamente, otra presunta falta disciplinaria, ya que, no tienen en cuenta que, el proceso 068 de 2017, se trata de un trámite incidental de desacato, que tenía como fin entre otros, cumplir con la decisión de tutela de primera instancia que dejó sin efectos, el auto que decretó la perención. **Por lo tanto, es un YERRO, creer que existen faltas simultáneas.** Pero, por la posición dominante que ejercen, continuaron ambos procesos, acumulándolos en uno solo, el 647 – 16.

Tal apreciación, la sustento, del fallo de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de fecha: cuatro de agosto de 2021, Magistrado Ponente: MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO, Rad. No.68001110200 2017 01800 01. Aprobado según Acta No. 047 de la fecha. Que, entre otros, expresa:

“(…) Frente a la conducta del abogado Pinzón Pachón, del acervo probatorio se observa que la única actuación cuestionada concierne al presunto acto fraudulento y de suplantación de identidad, cometido el 17 de abril de 2015, con la presentación del memorial que buscaba informar al juez de la causa, en nombre del quejoso, sobre la existencia de un heredero.

En consecuencia, la consumación de la supuesta conducta se presentó cuando se radicó el oficio ante el juzgado de conocimiento, como quiera que no se cometieron posteriormente otras conductas orientadas a la finalidad de suplantar la identidad o falsear la firma del quejoso.

En razón a lo expuesto, la conducta sería catalogada como de ejecución instantánea, en tanto **el comportamiento sólo se cometió en un solo momento.** La Corte Constitucional, acogiendo la postura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha abordado el estudio de los delitos de ejecución instantánea, que *mutatis mutandi* es aplicable a las faltas disciplinarias de esta misma naturaleza, los ha catalogado como aquellos «en los cuales la realización del comportamiento descrito se comete en un solo momento». (…)”

10.- YERRAN, de forma ¡EXABRUPTA! En ambas resoluciones, al afirmar que:

“Por ello, en el caso que nos ocupa el reproche disciplinario ha sido el incumplimiento del deber funcional de impulsar, tramitar y resolver el proceso de humedad que se resolvió archivar injustificadamente cuando se adujo que la parte querellante no había realizado impulso procesal alguno de la actuación policiva, desconociendo de que estaba pendiente de que se llevara a cabo nuevamente la inspección ocular en el inmueble objeto de la nulidad (sic), como fue ordenado en auto del 20 de octubre de 2015 y además, le fue indicado claramente que se haría como carga, responsabilidad o deber de la Inspección de Policía de programarle esa diligencia, en la que, además insistió para su práctica en los escritos que posteriormente elevó, conjuntamente, con su compañera de vida...” (Página 18 de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16).”

**No tuvieron en cuenta que, el auto de fecha 20 de octubre de 2015, no fue suscrito por la inspectora de policía de la Nueva Floresta y, por esa consideración, al no firmarlo la inspectora, no tiene existencia jurídica, mucho menos obligante para el nuevo inspector que la reemplazó en fecha uno (1) de julio de 2016.**

Igualmente, la misma interpretación errática, yendo en fuera de lugar jurídicamente, se dio en la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16., Páginas 41 – 42, al afirmar que:

“A folio 160 del expediente aparece visible el informe secretarial del 20 de octubre de 2015, el cual da cuenta al despacho de la inspección, que se encuentran “las peticiones elevadas ante este despacho por el Sr JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, querellante dentro del proceso de HUMEDAD 1944 – 549 radicada en este despacho los días 2,8 y 9 de octubre de 2015, donde solicita se deje sin efectos las recomendaciones hechas en acta del 8 de agosto de 2014 ya que por un error involuntario del despacho, se omitió en dicha acta, el nombramiento y posesión de la ingeniera perito...”, respecto del cual, el despacho emite el Auto sin numeración del 20 de octubre de 2015 que DISPONE:

1. Dejar sin efectos las recomendaciones hechas en acta del 8 de agosto de 2014 realizadas dentro del proceso por humedad 1944 – 549.
2. FIJAR fecha y hora para la práctica de la diligencia de inspección ocular...”

El anterior proveído tal, como lo señala el recurrente, no fue rubricado por la funcionaria de conocimiento, pero a continuación de la actuación, aparece visible el oficio 289 de octubre de 2015, en el cual como “Respuesta a solicitud” (folio 161 a 162) suscrito por la inspectora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, en el cual informa de la decisión adoptada en el proceso e indica que “programará nuevamente fecha para la diligencia de inspección ocular...”, folio 161 y 162.

En ese orden de ideas, este Despacho, para evaluar la conducta del disciplinado, tendrá en cuenta que la actuación antes referida, por la cual la inspección de policía dejó sin efectos las recomendaciones de la inspección ocular del 8 de agosto de 2014 y ordenó realizar una nueva inspección, tienen validez jurídica dentro del proceso policivo por cuanto no fueron declaradas nulas dentro del mismo (sic) ni existe decisión judicial que así lo disponga.

Ahora bien, frente al argumento del recurrente e investigado en este proceso disciplinario, al afirmar que dichas actuaciones no son válidas por no estar firmado el auto, por tratarse de una simple comunicación el oficio y porque la solicitud del querellante era extemporánea por presentarse por fuera del término de traslado del dictamen pericial, deberán ser consideradas en esta instancia, frente a las pruebas que reposan en el proceso disciplinario que en esencia se sustenta en el expediente policivo.

(...)

En ese orden de ideas, si bien la inspectora de policía de conocimiento en su momento adelantó la respectiva visita al predio, reconoce que por “error involuntario” no posesionó a la perito **por lo cual decidió practicar nuevamente dicha diligencia, empero, no firmó el proveído o decisión, situación que este Despacho, considera subsanada con la expresa manifestación contenida en el oficio con el cual informó el sentido de su decisión, radicado 289 de octubre 20 de 2015**, en el cual claramente da a conocer al querellante que dejaría sin efectos la diligencia practicada y fijaría nueva fecha. (...)” (negrilla y subraya fuera de texto)

**11.- Señor (a) Juez (a) Cómo es posible que, tanto, en decisión de primera y segunda instancia, afirmen que, es válido jurídicamente, el Auto de fecha 20 de octubre de 2015, donde la Inspectora de Policía de la Nueva Floresta, no lo firma. Pero, le dan valor al Oficio No. 289 de 2015, del mismo día, mes y año, porque este sí, estaba firmado, argumentando que, por esa razón, queda subsanado el auto en comento.**

Sinceramente, Señor (a) Juez (a), **es lo más ABSURDO que he podido leer**, proviniendo de dos (2) abogados, más los que revisan y suscriben dichos actos administrativos, que también tienen dicha profesión, a excepción del alcalde. Sea esta la oportunidad, para que, soporten jurídicamente, tales apreciaciones que, conllevaron a ser factor determinante en ambas decisiones que hoy, se atacan. Cabe decir, que, las sustentaciones se dan, con las fuentes del derecho, no de forma subjetiva.

Por tal razón, no tuvieron en cuenta, que dicha inspectora, en el Acta de la diligencia de inspección ocular, llevada a cabo el 8 de agosto de 2014, la perito Ingeniera LUZ AMPARO ZAPATA, actuó en la diligencia, dio las recomendaciones de su experticia profesional, firmó dicha acta y en ella, se concedió un plazo a las partes para la ejecución de los trabajos que recomendó la perito, uno (1) de octubre de 2014, se corrió traslado en estrado de tres (3) días para que las partes si lo consideraban necesario, solicitaran ampliación o aclaración. Por lo tanto, dicha acta quedó en firme.

12.- YERRAN, en ambas decisiones, al darle valor al oficio 289 del 20 de octubre de 2015, suscrito por mi antecesora, ya que, éste es accesorio, apenas es una comunicación que, carecía del acto principal que lo fundara, siendo que, el acto administrativo del 20 de octubre de 2015, sin una motivación legal, la única acción que correspondía a las partes, era la solicitud de nulidad, alegando una de sus causales. Aun así, la inspectora de policía, en su momento, pretendió dejar sin efectos las recomendaciones de la perita y, en consecuencia, dejar nula el acta de la diligencia llevada a cabo el ocho (8) de agosto de 2014 y, al no firmar la inspectora dicho acto administrativo, este no tuvo existencia jurídica, es inexistente, por lo tanto, el oficio 289, queda sin sostén jurídico. (Exp. 647 Tomo 1 Pág. 198)

13.- Aunado a lo anterior, no tuvieron en cuenta que, la disposición normativa, expresada en el artículo 277 de la Ordenanza 343 de 2012, es totalmente válida y legal, dentro de los procesos policivos del Valle del Cauca, por ser ésta, el Código Departamental de Policía, norma que, aún, está vigente, por no ser incompatible con la Ley 1801 de 2016.



14.- No valoraron las pruebas testimoniales, que rindieron los dos (2) inspectores de policía con más años de servicio en ese cargo, la **Dra. PATRICIA INÉS CORINA ROJAS**, quien para la fecha, funge como Asesora de la Secretaría de Seguridad y Justicia y, el **Dr. ÁNGEL MARÍA NAVIA**, los cuales expresaron que, la aplicación de la perención es viable en los procesos policivos de humedad, acorde a las condiciones previstas en la norma policiva departamental, e incluso, el Dr. Navia, no solo expresó la viabilidad y legalidad en la aplicación de la perención de los procesos de humedad, sino que, argumentó que: **“esa clase de decisiones son adoptadas por los inspectores en los asuntos de su competencia.”** (Página 8 de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16) y (Página 9 de la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.)

15.- Con base en lo anterior, estaba demostrado que, decretar la perención dentro de un proceso policivo, es viable y legal, acorde a las condiciones estipuladas en el artículo 277 de la Ordenanza 343 de 2012. Pero, desde un principio, conociendo al abogado contratista SAUL MUÑOZ, de la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía, quien apunta, a un interés personal que, procesal, todas las argumentaciones y recursos presentados, iban a ser desconocidos por este señor y, por ende, del Director de Control Disciplinario. Es preciso aclarar que, quien aparece proyectando la resolución en primera instancia es el abogado contratista **CRISTIÁN MUÑOZ INSUASTI**, pero quien en realidad la realizó, fue dicho abogado SAUL MUÑOZ, ya que, presenta los mismos yerros jurídicos del Auto No. **4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021**, que dio **APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL 647 – 16**.

16. Se puede observar, en la decisión de segunda instancia, **Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022**, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16, **en la parte RESOLUTIVA, ARTÍCULO TERCERO, que ordena REMITIR a la Personería Distrital de Santiago de Cali copia del presente proveído, para que se sirva evaluar la procedencia de iniciar o no una actuación disciplinaria por el período de tiempo que no hubo impulso o actividad en el proceso disciplinario.**

Más de TREINTA Y SIETE (37) MESES en el Exp. 647 - 2016 y CUARENTA Y SEIS MESES, el Exp. 068 – 17.

Aun así, se acogen a la suspensión de los términos de suspensión de los procesos administrativos, generados por la PANDEMIA. Pero, en el evento, de aceptarse dichos términos, está PRESCRITA LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, como se observó en el numeral uno de este acápite.

17. En fecha 14 de Octubre de 2022, se presentó ante la Procuraduría, la solicitud de Conciliación Judicial, para cumplir con el requisito de procedibilidad, la cual se surtió el seis (6) de diciembre de esta anualidad, declarándose fallida, situación que motiva llegar a esta instancia. Se anexa el Acta respectiva.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **A. NORMAS VIOLADAS.**

- 1.- Constitución Política de Colombia, artículo 29
- 2.- . Artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y Parágrafo.
- 3.- Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

### **B. CONCEPTO DE VIOLACIÓN**

“(…) Artículo 29 de la C.P. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)”

Violan flagrantemente, esta norma constitucional, acorde a lo expresado en **Sentencia 06148 de 2018 Consejo de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B** Consejera Ponente: **SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Expediente: 250002342000201306148 01** (0491-2017) Demandante: Ricardo Mosquera Meza Demandados: Nación, Procuraduría General de la Nación y Universidad Nacional de Colombia.

Asunto: Prescripción de la acción disciplinaria. / Debido proceso administrativo. / Auto de formulación de cargos. Decisión: Revocar la Sentencia de primera instancia del 15 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección A que accedió a las pretensiones de la demanda.

*“(…) Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.*

(...)

Luego, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia de primera instancia 17 de abril de 2013 al resolver una acción de tutela incoada contra la sentencia de 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dejó esta decisión sin efectos y en consecuencia precisó que dentro del plazo de los cinco (5) años la autoridad disciplinaria debía proferir el fallo de primera instancia y si se presentaron recursos proferir y notificar el fallo que los resuelve.

Finalmente, luego de varios impedimentos y nulidades<sup>35</sup> la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela antes mencionada profirió sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2014<sup>36</sup>, en la cual revocó la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado de fecha 17 de abril de 2013, con lo cual quedó en firme la sentencia de 29 de septiembre de 2009<sup>37</sup> de **la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la cual se indica que para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria la autoridad disciplinaria dentro de los cinco (5) años siguientes al cometimiento de la conducta investigada únicamente debía concluir la actuación administrativa, esto es, expedir y notificar el fallo de primera o única instancia.** (negrilla fuera de texto)

(...)

**Del anterior recuento, se concluye que la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la sentencia de 29 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual, dentro del término de cinco (5) años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 –sin la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011-, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el fallo de primera o única instancia.** (negrilla fuera de texto)

En ese orden argumentativo, bajo la vigencia del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus dos subsecciones, ha aplicado la tesis decantada por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 29 de septiembre de 2009.

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de febrero de 2014<sup>39</sup>, en un asunto<sup>40</sup> donde el actor acusaba que se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria porque la Procuraduría General de la Nación no notificó el fallo de segunda instancia dentro del término de los 5 años *-señalado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002-*, afirmó que la sanción disciplinaria se impone y en consecuencia se interrumpe el término de la prescripción con la expedición y notificación del fallo disciplinario principal y no con la expedición y notificación del fallo que resuelva los recursos de la vía gubernativa.

Esta misma interpretación jurídica del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, fue acogida posteriormente por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia de 28 de julio de 2014<sup>41</sup>, en un asunto de similares características al presente, en el cual el actor presentó como argumento de nulidad la prescripción de la acción disciplinaria argumentando que la Procuraduría General de la Nación profirió y notificó por fuera del término de 5 años el fallo que resolvió un recurso de reposición que interpuso contra el fallo de única instancia;<sup>42</sup> la Sala señaló que dentro del mencionado plazo, para que no opere la prescripción la autoridad disciplinaria solo debe proferir el acto administrativo principal y no los que resuelven los recursos interpuestos contra este.

(...)

De conformidad con las conclusiones expuestas en el presente acápite, respecto de los elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta para la contabilización de prescripción de la acción disciplinaria, a continuación, la Sala se permite esquematizar el referido asunto, así:

PLAZO:

- 5 años –para faltas comunes-.
- 12 años para faltas de especial gravedad.

INICIO DE CONTABILIZACIÓN DEL PLAZO:

Para las faltas de agotamiento instantáneo - Desde el cometimiento de la conducta.

Para las faltas de agotamiento continuado - Desde el cometimiento de la última conducta.

FORMA DE CONTABILIZACIÓN:

Independiente para cada una de las conductas investigadas en un mismo proceso disciplinario.

INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO:

Con la expedición y notificación de los fallos de primera o única instancia.

CONSECUENCIA DE LA CONFIGURACION DE LA PRESCRIPCION:

Pérdida de la competencia para sancionar (...)”

**Violan, además, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, al querer darle una interpretación equívoca. El a quo y el a quem, dejaron un vacío jurídico, en cuanto, no pudieron determinar en qué momento prescribe la acción disciplinaria.** Omiten lo expresado en el Parágrafo del mismo artículo que expresa:

“(...) **PARÁGRAFO.** Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”. (...)”

Además, inobservaron las jurisprudencias del Consejo de Estado expuestas en el proceso 647 – 16 que, terminó con sanción, más, por la posición dominante que, desestimaron argumentos jurídicos válidos dentro del Proceso Verbal Abreviado 647 – 16, como fueron los alegatos presentados y sustentados en ambas instancias.

**ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Así las cosas, con la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16 y, la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16, se aprecian no solo que, sancionaron a este servidor habiendo perdido la competencia para sancionar, al estar prescrita la acción disciplinaria, sino que, aun es más reprochable que, la conducta no es disciplinable, al estar soportada por una norma dentro de la Ordenanza 343 de 2012, en el artículo 277 que, trata sobre la perención, siendo la Ordenanza, el Código Departamental de Policía del Valle del Cauca y, dicho artículo está vigente, al no ser incompatible con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía. Además, al ahincarse el a quo y el a quem, en un acto administrativo sin la rubrica de quien lo expidió, en este caso, la Inspectora de Policía de la Nueva Floresta, siendo este inexistente, no tuvo vida jurídica, por lo que, se deriva un acto de mala fe, contra este servidor público, una posición dominante que, conllevó a un perjuicio como lo es, quedar sin salario y restar las prestaciones sociales, por un mes. Se podrá notar tal apreciación, en la resolución de primera instancia que, incluso, su fin, era sancionarme por dos meses, bajo la conclusión del abogado contratista SAUL MUÑOZ VARGAS, que así, lo dio a demostrar en el **Auto No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021**, que dio **APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL 647 – 16**.

Nótese, en la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió el recurso de apelación, CONFIRMÓ la decisión de primera instancia, pero no dice, porqué reduce la sanción a un solo mes, guardaron silencio, aunque, para este togado, es claro, el porqué la corrección, aunque, repito, no fue sustentada.

### **COMPETENCIA**

Acorde al artículo 155 del CPACA, numeral 3, es competencia de los Juzgados Administrativos por la cuantía.

## ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Se estima la cuantía en TRECE MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA MIL, CIENTO DIEZ PESOS \$13'980.110, correspondiente a:

\$3,291.614 que, equivale a 30 días del salario de noviembre de 2022

Cesantías: \$274.301

Prima de Navidad: \$274.301

Vacaciones: \$137.151

Más, la indexación y/o los intereses moratorios que, se causen hasta hacerse efectivo el pago ordenado judicialmente.

**DAÑO MORAL.** Respecto a la estimación de la cuantía para este concepto, cabe decir que, desde el 10 de agosto de 2021, fecha en que se cumplían cinco (5) años de haber proferido el auto que decretó la perención en el proceso policivo de humedad 1944 – 549 de 2014, fui notificado del **Auto No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021**, que dio **APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL 647 – 16**, desde esa fecha, hasta la presentación de esta solicitud extrajudicial, he tenido noches, donde fue difícil conciliar el sueño, bien sea por estar atento a la defensa objetiva dentro del proceso en comento, pero lo que más daño físico y mental, produce, es observar la posición dominante ejercida en todo el proceso disciplinario, donde veía que, los argumentos jurídicos válidos que, fueron expuestos en las diferentes etapas procesales, eran rechazados y contestados sin fundamentos legales precisos e incluso, con una acolitación en segunda instancia, por lo cual, presenté queja disciplinaria contra la abogada de jurídica que las proyectaba y coincidentalmente, resolvió, igualmente, el recurso de apelación de la sanción, cuando ya había perdido la facultad para sancionar el a quo, mucho más aún, el a quem. Por tal circunstancia, más los efectos que produce, dejar cesante por 30 días, sin salario, a un servidor público, por la temeridad de funcionarios que, impusieron el poder dominante, solicitaré ante el Señor Juez, que haya una compensación por este concepto, ya que, con el solo hecho de sancionar, habiendo perdido la competencia, es prueba más que suficiente, para concluir que, los accionados causaron un daño moral al accionante, más aún, cuando su comportamiento como servidor público nunca ha sido y, me atrevo a decir, no será cuestionado jamás.

Por lo anterior, para que, se produzca una compensación, generada no solo a este funcionario, que hoy, continúa defendiéndose en causa propia, sino también, a mi familia que, observó todas las actuaciones dentro del proceso y la sanción fuera de lo legal, repercutiendo en ella, por los lazos que nos unen.

**Estimo el daño moral en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS \$10'000.000.**

## PRUEBAS

1.- Anexo, copia adjunta, de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16.

2.- Copia adjunta de la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.

3.- Copia adjunta de la Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano.

4.- Copia de los alegatos presentados en primera instancia.

5.- Copia de los alegatos aportados en segunda instancia.

6.- De oficio. Solicito respetuosamente, se oficie a los accionados para que, alleguen al despacho, los antecedentes administrativos que, motivan esta acción constitucional.

7.- Mi T.P. de abogado, podrá ser consultada en la página web del Consejo Superior de la Judicatura.

8.- Acta **No. 237** expedida por la **PROCURADURÍA 18 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**, Radicación **N. 217- E-2022-597376** del **6 de diciembre de 2022** declarando la conciliación fallida.

## **PRETENSIONES**

1.- Solicito muy respetuosamente, sírvase reconocerme personería jurídica para actuar en CAUSA PROPIA. Acorde al DECRETO 196 DE 1971. ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, modificado por la Ley 583 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.042, del 13 de junio de 2000, "Por la cual se modifican los artículos 30 y 39 del Decreto 196 de 1971.

“(…) INCOMPATIBILIDADES ARTICULO 39. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 583 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>

No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos: 1. Los servidores públicos, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, **excepto en causa propia** y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones. (...)” (Negrilla y Subraya fuera de texto original)

2.- Solicito, **SENTENCIA ANTICIPADA**, acorde a lo expresado en el CPACA:

**“(…) ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA.** <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

**a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;**

**b) Cuando no haya que practicar pruebas;**

**c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;**

3.- Una vez, aceptada esta solicitud, solicito respetuosamente:

1.- DECLARAR que, se configuró el fenómeno de la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, al proferirse la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia en el Proceso Verbal con Radicación 647 – 16, por fuera de los cinco (5) años, acorde a los Tratados Internacionales suscrito por Colombia, las jurisprudencias y lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

2.- Se declare la nulidad de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16.

3.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.

4.- Se declare la nulidad de la Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano.

5.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a favor de **HUGUES OTHÓN OLIVELLA SAURITH**, a título de restablecimiento de derecho: i) el **reconocimiento** y pago por concepto del tiempo que duró suspendido, desde el uno (1) hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, más las prestaciones sociales causadas y dejadas de pagar con su respectiva indexación.

6.- Condenar al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, en los daños materiales y morales, causados por **los efectos producidos en sancionar al haber perdido la competencia**, y los que, se ocasionen, por no poder aspirar a un encargo con efectos fiscales, mediante convocatoria interna que, realice la demandada, en los 12 meses siguientes de haberse ejecutado la sanción.

7.- Condenar al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, en el caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término establecido en el inciso 3 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, pague a favor de mi mandante los intereses moratorios conforme lo establece el artículo 192 ibidem; y, asimismo, se le reconozca demás emolumentos legales por este incumplimiento.

8.- Ordenar al Distrito de Santiago de Cali, DADII, Subdirección del Talento Humano, que notifique a las entidades pertinentes, la decisión conferida por este despacho, para que, se borren los antecedentes disciplinarios del servidor público Hugues Othón Olivella Saurith, que tengan efectos, con este proveído.

9.- CONDENAR EN COSTAS A LA DEMANDADA, por haber proferido resoluciones de 1ª y 2ª instancia, cuando habían perdido la competencia para sancionar, por estar prescrita la acción disciplinaria.

### **JURAMENTO**

Juro ante usted Sr. Juez (a) que, no he presentado otras acciones por los mismos hechos y pretensiones.

### **NOTIFICACIÓN**

El accionante las recibirá en mi dirección electrónica: [olivella26@hotmail.com](mailto:olivella26@hotmail.com)

La accionada en: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)

Atentamente,



HUGUES OLIVELLA SAURITH

C.C. 12'623.237

T.P. No.192667 del C.S. de la J.

Cel. 3145542794